

PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

Semana de Solidaridad

Abogado general de la UNAM

En su doble personalidad, análoga a la de Mr. Hyde y el Dr. Jeckyll, el gobierno mexicano fabrica pobres y los socorre. Pone en práctica una política económica que, mediante la liberalización comercial suscita desempleo y por medio del combate a la inflación comprime los salarios; es decir, genera pobreza. Pero, al mismo tiempo, instrumenta el Programa Nacional de Solidaridad, cuya primera etapa culmina ahora con la muy rumbosa primera Semana Nacional de lo mismo.

PLAZA DOMINICAL

Viene de la 1

El credo y las acciones gubernamentales en materia económica no son todo lo eficaces que se alega, en cuanto a reducir las presiones inflacionarias. Si se compara la tasa respectiva de hoy, con la que los propios operadores de la actual generaron en 1986 y 1987, se advertirá un progreso considerable. Pero no, si se tienen en cuenta los objetivos trazados para 1990 por el propio gobierno: a la mitad del año ya hemos alcanzado el nivel inflacionario que los planes oficiales anunciaban para todo el año.

En cambio, los salarios y los precios agrícolas, el ingreso de los trabajadores del campo, se mantienen congelados, en contraste con los ajustes y correcciones a muchos precios al consumidor. Como subproducto, esa circunstancia prueba que al revés de la prédica del neoliberalismo, las remuneraciones al personal son poco significativas en la formación de los costos, en general. Se muestra así su falsedad de tesis de que los salarios empujan hacia arriba los precios, y que por ello hay que mantenerlos quietos: ahora no se han movido y el impulso alcista está de todos modos presente.

Los mexicanos pobres, en consecuencia, son cada vez más pobres. Nadie puede válidamente afirmar lo contrario, pues aun las estadísticas oficiales aceptan que el nivel adquisitivo de los salarios se ha deprimido grandemente. Por ello, diecisiete millones de compatriotas nuestros padecen pobreza extrema. En proporción a la cifra total de habitantes, eso significa que uno de cada cinco mexicanos está en la miseria. Y muchos más radican en las franjas cercanas a esa situación.

Frente a una realidad de ese tamaño, ni siquiera la conciencia más friamente tecnocrática puede permanecer impasible. Por eso, el gobierno estableció el Programa Nacional de Solidaridad, que siendo varias cosas a la vez, produce por lo mismo juicios diversos y hasta encontrados. Las obras que se inauguran o ponen en marcha en estos días —del 2 al 8 de agosto— benefician de modo directo a muchas personas, que con caminos, introducción de agua potable, drenaje, servicio eléctrico, instalaciones de salud, mejor vivienda y equipamiento educativo vivirán días menos adversos. Cualquiera que sea la intención de los promotores de estos servicios, su impacto en la vida cotidiana de los beneficiarios es real, y debemos felicitarnos por ello.

Pero el Programa es un paliativo, sólo, a la pobreza, y la Semana un despliegue propagandístico. Puesto que los montos presupuestales se rigen por criterios neoliberales, rígidamente productivistas y contrarios al déficit fiscal (que puede ser manejado como un instrumento de política económica y no es, en consecuencia, fórmula de Satán), el gasto social se financia con ingresos coyunturales, como la venta de empresas públicas y, se afirma, los ahorros conseguidos en la renegociación de la deuda; y otros que pudieran ser permanentes como los englobados por el Presidente en su afirmación sobre "el cumplimiento de las obligaciones de cada quien". Pero al no contar con un sustento tributario permanente, y por más útiles que sean las obras que se entregan esta semana, se asemejan al pescado entregado al hambriento, a quien no se enseña a pescar.

Se entiende que el gobierno subraye sus acciones de solidaridad, pues de ese modo combate la idea de que la gente le importa menos que la cuadratura de sus libros de contabilidad. Se entiende, también, que la palabra solidaridad lo



Contención de simpatizantes perredistas durante la gira de Salinas de Gortari por Los Pedregales, en Coyoacán ■ Foto: Arturo Guerra

inunde todo hoy día. Que haya cundido con tal fuerza y profusión muestra la vigencia de una de las peores expresiones del presidencialismo: como se trata de un término y una iniciativa gratos al Presidente, y más que eso, su principal bandera en el ámbito social, todo se convierte en un esfuerzo, un apoyo, un sumando a tal promoción, aunque sea sólo de dientes para afuera.

Pero se ha producido una sobreactuación, un exceso, un *choteo*, como antes se decía. Una tienda de descuento ofrece descuentos en el papel sanitario, en apoyo a la Semana Nacional de la Solidaridad, lo que por lo menos es de mal gusto. Y muchas otras se han montado, con oportunismo, en la promoción presidencial, consiguiendo un objetivo contrario al que aquella iniciativa persigue, que es conmover las conciencias en torno de la pobreza. Por contra, el carácter meramente epidérmico, hasta banal, del Programa queda subrayado.

Considérense también las consecuencias formalmente políticas de la iniciativa de Solidaridad. Los programas de bienestar social en México han tenido, de suyo, una pretensión, aledaña a su objetivo básico, o sustitutiva de él, de control político. Hoy la necesidad gubernamental de que así sea, es mayor que nunca. El populismo dadivoso que no osa decir su nombre y que hoy se practica, buscará cobrar sus réditos políticos del modo más directo posible. Por eso circula la idea de que dentro de un mes el partido oficial incluya de alguna manera, en su nombre, en su divisa, en su emblema, los de este programa y esta semana, en beneficio de la movilización política que el partido requiere reforzar.

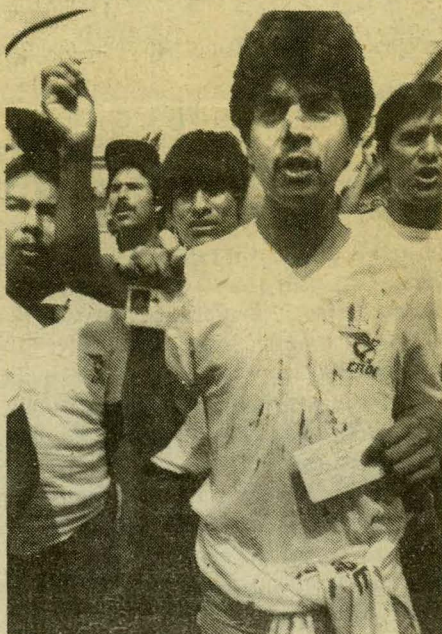
No es descabellado imaginar la *solidarización* del partido oficial. Solidaridad es una palabra clave en las tesis de una corriente del Partido de Acción Nacional. Que lo sea también ahora en el PRI es una más de las evidencias sobre la cada vez mayor cercanía entre los dos partidos. Solidaridad fue, también, por su sabor católico, el término utilizado por los reformistas polacos para bautizar a su sindicato, cuya sujeción a la Iglesia, la de Varsovia y la de Roma, han sido ostensibles desde siempre. Los gérmenes de un confesionalismo de derecha, antagónicos durante décadas al liberalismo social mexicano, entrarán así al ideario oficial con el pasaporte equívoco de la solidaridad.

La administración del Programa requiere también un comentario. Carlos Tello es ahora embajador de México en Moscú. Abandona así la presidencia del consejo consultivo del Programa, cuyo

teórico llegó a ser. La posición que le había sido otorgada ayudaba, por un lado, a involucrar en el gobierno al representante de una corriente nacionalista y popular, que había caído en el descrédito misma. Pero, por otro lado, no lo involucraba en acciones operativas, que es donde se manifiesta el verdadero talante del Programa. De todos modos, la creación de una conciencia sobre la magnitud y trascendencia de la pobreza debe ser abonada a la cuenta de Tello.

Aplicar el Programa es ahora tarea de dos hermanos de sendos personajes. El secretario ejecutivo es el propio ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Era el director de planeación de Conasupo y su nuevo cargo revela el gran interés personal del Presidente en el tema, habida cuenta de la notoria influencia que su hermano tiene en los ambientes administrativos y políticos relacionados con el campo. La coordinación formal del Programa, sigue estando a cargo del también ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez —hermano del director general de Pemex— que desempeña esa tarea como parte de sus responsabilidades de subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La intensa promoción solidarista no es bastante para nublar otros temas de interés, como los relevos en la cúpula universitaria. En una semana, dos miembros del segundo nivel del gobierno de la UNAM se marcharon a su casa. El coordinador de Humanidades, Roberto Moreno de los Arcos fue reemplazado por Julio Labastida, un abogado converso a la sociología que dirigió el Instituto de Investigaciones Sociales y



Trabajador de Tornel ■ Foto: Francisco Mata Rosas

fue también director de estudios sociales en la UNESCO.

A su vez, en un vuelo circense en que perdió el trapecio —pues renunció para poder ser elegido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y no lo fue— Manuel Barquín dejó de ser abogado general de la UNAM y, para perjuicio de la función, se designó para sustituirlo a Mario Melgar. Un cargo de esa importancia requiere un titular que sea un reputado profesional del derecho, y quizá Melgar no cubre esa exigencia. Ha publicado recientemente un libro, compuesto por artículos periodísticos y en la nota introductoria declara que no solicitó de los autores el permiso para incluir sus textos, porque son del dominio público. Hasta un aprendiz de leyes sabe que el dominio público es la situación legal que sucede a la muerte de los autores o al término de la vigencia temporal de la reserva acordada con su favor. Tal vez Melgar quiso referirse a la posibilidad ofrecida por el artículo 10 de la Ley Federal de Derechos de Autor, que permite la reproducción de artículos de actualidad, siempre que no sean objeto de reserva especial o general, pero sin considerarlos del dominio público, porque eso implicaría privar de sus derechos a quienes los escribieron.

Pero eso es lo de menos. Lo de más consiste en saber si el talante político de Melgar es hoy lo que más conviene a los intereses generales de la Universidad que, como es obvio, no necesariamente coinciden con los intereses particulares del rector. El libro compilado por Melgar al que nos referimos, lo muestra de cuerpo entero en su militancia cerril. Se trata de una obra titulada *Juego sucio: el PRD en Guerrero*, editado como parte de la misma estrategia en favor del gobernador de aquella entidad, José Francisco Ruiz Massieu, para quien trabajaba Melgar, que condujo a la publicación de un panfleto anónimo de la misma calaña que *El móndrigo* y otros engendros.

No es que asuste, ni parezca imperdonable que el abogado general de la UNAM sea priísta. Priístas y abogados generales lo fueron, por citar sólo dos casos, Diego Valadez y Eduardo Andrade. Este había sido, incluso, ya diputado cuando asumió la oficina de la que fue también titular Jorge Carpizo. Una cierta división del trabajo haría quizá deseable que se delimitaran los terrenos de la política propia de la administración universitaria y los de la política de partido, pero ello acaso condujera a un aislamiento de lo académico, a un angelismo perjudicial.

Pero no es hoy lo más pertinente poner en la representación jurídica de la Universidad Nacional a un "golpeador", a un "fajador" como Melgar. Para colmo, ni siquiera es elegante. Incluye once de sus propios artículos en una antología que dista de ser un ejercicio académico, pues sólo fueron escogidos los textos favorables a la causa de Ruiz Massieu. Melgar escondía sus escritos originalmente en *Novedades* y ahora lo hace en *unomásuno*. Muestra de su modo de ver la política y de su estilo, es la siguiente afirmación sobre el uso de carabinas por perredistas en Guerrero: "Por menos armas de las que han aparecido en las fotografías de los diarios están en la cárcel Arturo Durazo y el grupo de los del *quinazo*". Digamos, en fin, que cada quien tiene los lectores que le corresponden: el nada civilizado diputado priísta Dionisio Pérez Jácome llamó en la Comisión Permanente, el miércoles pasado, "gran editorialista" a Melgar. Lo considerará ahora sin duda, "gran abogado general".